

PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCION

LA HONORABLE CONVENCION CONSTITUYENTE SANCIONA

ARTÍCULO 1°): **INCORPÓRESE** a la Constitución Provincial el siguiente artículo:

“Artículo...: Todo habitante de la Provincia tiene el derecho de acceso a la información pública. La ley reglamentará el ejercicio del mismo debiendo garantizar los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad en el mecanismo respectivo como asimismo las excepciones a brindar la información requerida y los remedios procesales ante el incumplimiento por parte de la autoridad requerida.”

FUNDAMENTOS

La Ley 9768 que declara la necesidad de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial en su artículo 1°, inc. 23 habilita a incorporar el derecho de acceso a la información pública.-

Cuando se habla de acceso a la información pública no se está haciendo otra cosa que reconocer la existencia de un derecho elemental y básico de todo sistema democrático y republicano. Si bien la Constitución Nacional no prevé expresamente la publicidad de los actos de gobierno, el artículo 33 de nuestra Carta Magna Nacional proporciona suficiente fundamento para la vigencia de este derecho. Este derecho de los ciudadanos y consecuente obligación de los funcionarios es, en definitiva, una derivación de la adopción de la democracia representativa como forma de gobierno y es el corolario de considerar a la información pública como perteneciente al dominio público, por lo que puede ser aprehendida por cualquiera de todos los ciudadanos. En este sentido el Código Civil establece, en el art. 2340, que: *“Quedan comprendidos entre los bienes públicos: ... 8) Los documentos oficiales de los poderes del Estado...”* y en el art. 2341 que: *“Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado...”*.-

El derecho de acceso a la información pública constituye uno de los mecanismos de contención, contrapeso y vigilancia de los órganos de gobierno por parte de los ciudadanos. Pero este derecho, como todos, no es absoluto. Si bien la democracia exige un acceso efectivo a la información pública, lo cierto es que de no existir razonables limitaciones a ese derecho se podría poner en peligro la existencia misma del Estado. Así, el Estado tiene la potestad de sustraer del conocimiento público cierta información que hace a cuestiones esenciales para mantener su vigencia, como por ejemplo aquellas que se refieren a su defensa y seguridad exteriores. La regla que rige (o debe regir) en todo sistema republicano es que toda la información que se halla en poder del Estado es pública (es decir, de conocimiento de todos y por todos), salvo que haya sido previamente declarada secreta o clasificada mediante decisión fundada y razonable.-

Se ha dicho que el derecho de acceso a la información pública se desprende del derecho a la información, siendo este último el género y aquél su especie con plena autonomía. Informar no es más (ni menos) que comunicar todo concepto susceptible de ser entendido por el ser humano. El derecho a la información incluye, como bien señala Ekmekdjian, el derecho a ser informado y a informar, el derecho a ser protegido frente a información disfuncional y el derecho a cuestionar y discutir la información recibida (EKMEKDJIAN, Miguel Angel; *“Derecho a la información”*; 2° Edición; Ed. Depalma; 1996, pág. 30).-

De lo que se trata, en última instancia, es de determinar si la información incumbe a todos los ciudadanos y es de todos los ciudadanos, sin que pueda válidamente disolverse en un haz de bienes sectoriales de interesados. En caso de que la información guarde especial e íntima conexión con el interés o bienestar general, entonces será pública.-

El reconocimiento al acceso a la información pública constituye un significativo parámetro del nivel de transparencia de un determinado ordenamiento jurídico. La relación entre transparencia y acceso es directamente proporcional: a mayor acceso, mayor transparencia.-

El deber por parte del Estado de dar a conocer la información que se encuentra en su posesión y el consecuente derecho de los ciudadanos de acceder a esa información están previstos en varias normas de los tratados internacionales (art. 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) que, luego de la reforma de 1994, tienen jerarquía constitucional (conf. art. 75, inc. 22). Asimismo, el derecho de acceso a la información pública ha sido receptado por diversos organismos internacionales, siendo posible su aprehensión a través de pautas o estándares básicos, entre los que podemos mencionar: a) no es necesario expresar la causa en el pedido de acceso a la información pública; b) la obligación estatal de suministrar se extiende a toda la información; c) el principio general es la publicidad; d) la información debe suministrarse en plazos breves, oportunos y razonables y e) la posibilidad de una intervención jurisdiccional ágil e inmediata en caso de que el pedido sea rechazado.-

Asimismo, nuestra Constitución Nacional ha previsto expresamente la obligación del Estado de brindar la información pública en determinados supuestos, tales como la información adecuada y veraz a favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios (art. 42), aquella relativa a la protección del medio ambiente (art. 41) o al derecho de los partidos políticos de acceder a la información pública (art. 38).-

En el ordenamiento jurídico nacional se ha dictado el Decreto N° 1172/2003 que ha reglamentado este derecho pero solamente en lo que se refiere al acceso a la información existente en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.-

De la lectura de los considerandos del Decreto surge claramente su espíritu y finalidad: garantizar el acceso de la ciudadanía a toda aquella información que hace a la cosa pública y a la transparencia en su manejo.-

A tal fin el Decreto N° 1172/2003 aprobó, entre otros, el “Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional”.-

Así la Jurisprudencia ha dicho que el objeto fundamental de este Reglamento “*consiste en hacer efectivo el principio de publicidad de los actos de gobierno y el consiguiente derecho de los ciudadanos a saber qué, cómo, cuando y quienes formulan las opiniones y toman decisiones adoptadas por sus representantes electos, evitando tanto el secreto como la reserva innecesaria o la reticencia de los organismos gubernamentales a mantener a la opinión pública debidamente informada*” (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala V, “Morales Gerardo Rubén y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía s/ amparo por mora”, sentencia del 18 de octubre de 2007).-

El Reglamento tiene por objeto regular el mecanismo de acceso a la información pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.-

Siguiendo esta política instaurada a nivel nacional de otorgar transparencia y publicidad a los actos de gobierno nuestra Provincia sancionó el Decreto N° 1169/05 GOB mediante el cual se aprueba el “Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Provincial”.-

En ambas normas se describe al acceso a la información pública como una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos pasivos comprendidos con la finalidad de permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz.-

Al respecto Comadira expresa que el régimen de acceso a la información pública no es *per se* un verdadero mecanismo de participación ciudadana -pues sólo alcanza para exigir administrativa o judicialmente el acceso a dicha información- sino que es más bien un modo de hacer posible esa participación (COMADIRA, Julio Rodolfo; “Procedimiento Administrativo y participación Ciudadana”, pág. 15).-

Con referencia a la **legitimación pasiva**, tanto el Reglamento Nacional como el Provincial son muy amplios. Así en el Dec. 1172/03 PEN no sólo se incluyen a los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional sino también a organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público. Y en el Dec. 1169/05 GOB se incluye a todas las dependencias de la Administración Pública Central y Descentralizada, Entes Autárquicos, Empresas del Estado, Sociedades con Participación Estatal y todo Ente Público.-

En materia de **legitimación activa**, el Reglamento no establece ninguna limitación, ya que prevé la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, pueda solicitar, acceder y recibir información, sin que sea menester acreditar derecho subjetivo ni interés legítimo que avale o justifique la petición.-

En este sentido se proyecta que “todo habitante de la Provincia” tenga el derecho de requerir información pública.-

En cuanto a qué se considera como “**información**”, podemos decir que la fórmula adoptada tanto por el Decreto N° 1172/03 PEN como por el Decreto N° 1169/05 GOB es por demás abarcativa. A los fines de ambos Reglamentos se considera información a “toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada o haya sido obtenida por los sujetos mencionados

en el artículo 2, o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales”.-

Se proyecta que la Legislatura deberá reglamentar el mecanismo de acceso a la información pública que se sustentará en cinco principios que se deben garantizar y respetar: la igualdad, la publicidad, la celeridad, la informalidad y la gratuidad como asimismo los supuestos en que los sujetos pasivos se encontrarán exceptuados de brindar la información requerida y los remedios procesales que contarán los habitantes ante el incumplimiento por parte de la autoridad requerida.-

Todo ello en concordancia con lo establecido en ambos reglamentos (nacional y provincial) donde se consagran estos postulados y regulan el procedimiento y los requisitos a los que se debe ceñir la solicitud de información donde prima la simplicidad de las formas. El sujeto pasivo del pedido tiene la obligación de permitir el acceso a la información en el momento de la requisitoria o proveerla en un plazo no mayor a diez días, pudiendo prorrogar dicho plazo en situaciones excepcionales y por acto fundado. La negativa del sujeto pasivo a brindar la información solicitada tiene que efectuarse por acto fundado si se verifica que la misma no existe o que se encuentra dentro de alguna de las excepciones que establece el Reglamento u otras normas jurídicas, como por ejemplo la “Ley de Confidencialidad”. Si una vez cumplido el plazo de ley (10 días), el sujeto requerido no satisface el pedido de información o si la respuesta es “*ambigua, parcial o inexacta*”, se considerará que existe negativa a brindarla por lo que el interesado podrá interponer una acción de amparo por mora.-

Por estas razones y por las otras que surgieran en el tratamiento de la comisión respectiva es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.-